

# Gaceta de Puerto-Rico.

SE PUBLICA

Todos los Mártes, Juéves y Sábados.



SE SUSCRIBE

En la Imprenta de Gobierno.—Fortaleza 21

## PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO.

Año 1895

JUEVES 25 DE ABRIL

Número 50

### PARTE OFICIAL.

#### GOBIERNO GENERAL DE LA ISLA DE PUERTO-RICO.

##### NEGOCIADO 1º

Por el Ministerio de Ultramar bajo el número 164 y con fecha 19 del mes próximo pasado, se me comunicó la Real orden que sigue:

“Excmo. Sr.:—El Rey (Q. D. G.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer la promulgación de la siguiente Ley:—“Don Alfonso XIII por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad la Reina Regente del Reino, A todos los que la presente vieren y entendieren, saber; que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente:—Artículo 1º El régimen del Gobierno y la Administración Civil de la Isla de Cuba se acomodará á las siguientes bases:—Base 1ª La Ley municipal y la Ley provincial vigentes en la Isla quedarán modificadas en cuanto sea necesario para los fines siguientes:—Las cuestiones relativas á la constitución de los Municipios, agregación, segregación y deslinde de términos municipales, serán resueltas por el Consejo de Administración previo informe de la Diputación provincial respectiva.—También quedará modificada la Ley provincial en todo aquello en que estas bases atribuyen la competencia al Consejo de Administración.—Las cuestiones relativas á la constitución de los Ayuntamientos, incidencias de elecciones, capacidad de los electos y demás análogas, serán resueltas por la Diputación provincial.—Serán Alcaldes los Concejales elegidos por los Ayuntamientos, mientras el Gobernador General no estime oportuno nombrar otro miembro de la Corporación. Los Alcaldes ejercerán, además de las funciones activas de la administración, como ejecutores de los acuerdos de los Ayuntamientos, la representación y delegación del Gobierno.—En todo caso de suspensión gubernativa de acuerdos municipales, el asunto pasará, desde luego, á conocimiento del tribunal ordinario, si la suspensión hubiese sido acordada por razón de delincuencia, ó á conocimiento de los Gobernadores Civiles, previo informe de la Diputación provincial, si el motivo de la suspensión fuese haber recaído el acuerdo en asuntos positivamente extraños á la competencia municipal ó haber infringido las Leyes.—Los Gobernadores Civiles podrán suspender los acuerdos de las Corporaciones municipales, y amonestar, aprecibir, multar ó suspender á sus individuos cuando traspasen el límite de la competencia municipal.—Para la destitución gubernativa de Alcaldes y Concejales, en los casos que la Ley determine, el Gobernador General deberá oír previa y necesariamente al Consejo de Administración.—Todo individuo de Corporación municipal que hubiese dictado providencia ó votado acuerdo lesivo para los derechos de particulares, será responsable de indemnización ó restitución á los perjudicados ante los tribunales que, según los casos, sean competentes, mientras tal responsabilidad no quede extinguida con sujeción á las reglas ordinarias del derecho.—En los asuntos definidos como de la privativa competencia municipal, cada Ayuntamiento gozará de toda la libertad de acción compatible con la obediencia á las leyes y con el respeto á los derechos de los particulares.—Para que los Ayuntamientos y las Juntas de asociados designen los recursos y arbitren los medios que prefieran en cada pueblo para cubrir los servicios y obligaciones del Municipio, se les concederá toda la latitud de facultades que sea compatible con el sistema tributario del Estado.—Las Diputaciones provinciales podrán revisar los acuerdos de las Corporaciones municipales relativos á formación ó alteración de sus presupuestos, sin menoscabar las facultades discrecionales de aquellas, cuidan-

do de que no se autorice gasto alguno que exceda de los recursos efectivos, y de que, con preferencia á toda otra necesidad, se solventen los débitos ó atrasos que resultaren de un año para otro y las obligaciones que hubieran sido declaradas por ejecutoria de los tribunales competentes. El Gobernador General y los Gobernadores solo tendrán en estos asuntos la intervención necesaria para asegurar la observancia de las leyes y la compatibilidad de los recursos municipales con los ingresos del Estado. Las cuentas anuales de los Alcaldes, comprensivas de los ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios, serán publicadas en las localidades, revisada y censurada, con vista de las reclamaciones, por las Diputaciones provinciales y aprobadas por los Gobernadores civiles si no excedieren de cien mil pesetas, y si excedieren de esa suma por el Consejo de Administración. Las Diputaciones y el Consejo declararán, en su caso las responsabilidades administrativas, á reserva de las que competan á los Tribunales ordinarios.—Los acuerdos de las Diputaciones provinciales serán apelables para ante el Consejo de Administración.—Base 2ª—El Consejo de Administración estará constituido de la manera siguiente:—Se á Presidente, el Gobernador General propietario ó interino.—El Gobierno nombrará por Real Decreto, quince Consejeros.—Tendrá éste una Secretaría con el personal indispensable para el despacho de los asuntos.—El cargo de Vocal del Consejo será honorífico y gratuito para todos los miembros.—Para ser nombrado Consejero se requiere, además de llevar cuatro años de residencia en la Isla, alguna de las cualidades siguientes:—Ser ó haber sido Presidente de Cámara de Comercio, de la Sociedad Económica de Amigos del País ó del Círculo de hacendados.—Ser ó haber sido Rector de la Universidad ó Decano del Colegio de Abogados de Capital ó provincia por espacio de dos años.—Figurar con cuatro años de antelación entre los cincuenta mayores contribuyentes de la Isla, por impuesto sobre la propiedad inmueble, ó por el ejercicio de profesión, industria ó comercio.—Haber ejercido el cargo de Senador del Reino ó Diputado á Cortes en dos ó mas legislaturas.—Haber sido dos ó mas veces Presidente de las Diputaciones provinciales de la Isla; haber sido, durante dos ó mas bienios, Vocal de la Comisión provincial ó durante ocho años Diputado provincial.—Haber sido durante dos ó mas bienios Alcalde en Capital de provincia.—Haber sido durante dos ó mas años Consejero de Administración hasta la promulgación de esta Ley.—Cuando lo estime oportuno podrá el Consejo llamar á su seno, por conducto del Gobernador General, para oírlos, sin que por esto tengan voto, á los Jefes de los servicios administrativos.—El Consejo se compondrá además de quince Consejeros elegidos por el mismo censo que las Diputaciones provinciales.—Estos cargos durarán cuatro años y se renovarán cada dos, verificándose la elección una vez en las provincias de la Habana, Pinar del Río y Puerto Príncipe, y otra en las de Matanzas, Santa Clara y Santiago de Cuba.—La Habana elegirá cuatro, Santiago tres y las demás provincias dos, cada una.—Elegidos de una vez todos los Consejeros al plantearse esta Ley ó en caso de destitución total, la primera renovación tendrá efecto á los dos años, cesando los del primer grupo de provincias.—En los casos ordinarios las elecciones se verificarán al mismo tiempo que las de Diputados provinciales y en un solo acto.—El Consejo examinará las actas y determinará respecto de la capacidad legal de los electos y de los de Real nombramiento, y resolverá todas las cuestiones referentes á su propia constitución con arreglo á las leyes.—En la primera sesión de cada año nombrará dos Vice-presidentes y dos Secretarios entre todos los Consejeros.—El Gobernador General podrá delegar en aquellos para el despacho ordinario de los asuntos.—Base 3ª—El Consejo de Administración acordará cuanto estime conveniente para el régimen en toda la Isla, de las obras públicas; comunicaciones telegráficas y postales, terrestres y marítimas, de la agricultura, industria y comercio; de la inmigración y colonización; de la instrucción pública;

de la beneficencia y de la sanidad, sin perjuicio de la alta inspección y de las facultades inherentes á la soberanía que las leyes reserven al Gobierno de la Nación.—Formará y aprobará todos los años el presupuesto con suficientes recursos para dotar aquellos servicios.—Ejercerá las funciones que las leyes municipal y providencial le asignen y cuantas le atribuyan otras leyes especiales.—Censurará y en su caso, apobará las cuentas de su presupuesto que serán rendidas todos los años por la Dirección General de Administración local, declarando las responsabilidades administrativas que resultaren.—Los ingresos del presupuesto local consistirán:—Primero. En el producto de los bienes y rentas que pertenezcan al Estado ó á los establecimientos é institutos cuyo régimen económico compete al Consejo.—Segundo. En los recargos que dentro de los límites que las leyes autorizan acuerde el Consejo sobre las contribuciones é impuestos del Estado.—Al Gobernador General como Jefe Superior de las Autoridades de la Isla, incumbirá ejecutar todos los acuerdos del Consejo.—Al efecto, como delegado de aquél, la Dirección General de Administración local tendrá á su cargo los servicios dotados en el presupuesto local y la contabilidad referente al mismo, y será responsable de la inobservancia de las leyes y resoluciones legítimas del Consejo de Administración.

Cuando el Gobernador general reputare contrario á las leyes ó á los intereses generales de la Nación cualquier acuerdo del Consejo, suspenderá su ejecución y adoptará por sí mismo interinamente las providencias que exigieren las necesidades públicas que quedaren desatendidas por efecto de la suspensión, sometiendo inmediatamente el asunto al Ministerio de Ultramar.

Si algún acuerdo del Consejo lesionara indebidamente derechos de particulares, los que hubiesen contribuido con su voto á adoptarlo, serán responsables de indemnización ó restitución al perjudicado, ante los Tribunales competentes.

El Gobernador general, oída la Junta de Autoridades, podrá suspender el Consejo, ó sin aquel requisito decretar la suspensión de sus individuos mientras quede bastante número para deliberar:

Primero. Cuando el Consejo ó alguno de sus miembros traspase el límite de sus facultades legítimas con menoscabo de la Autoridad gubernativa ó judicial ó con riesgo de alteración del orden público.

Segundo. Por razón de delincuencia.

En el primer caso dará cuenta inmediatamente al Gobierno para que éste levante la suspensión ó decrete la destitución por acuerdo adoptado en Consejo de Ministros, dentro del plazo de dos meses, transcurridos los cuales, sin una u otra providencia, quedará alzada de derecho la suspensión.

En el segundo caso, entenderá desde luego en el asunto el Tribunal competente que será la Audiencia de la Habana en pleno, y se estará á lo que ésta resolviese sobre la suspensión.

En lo relativo á las demás responsabilidades tendrán los acusados el recurso de casación.

El Consejo será oído:

Primero. Sobre los presupuestos generales de gastos y de ingresos cuyos proyectos, que habrá formado la Intendencia, serán elevados todos los años, dentro del mes de Marzo ó antes, al Ministerio de Ultramar, con las modificaciones propuestas por el Consejo.

Aunque el Gobierno varíe el proyecto para presentarlo á las Cortes, á fin de proveer á los servicios y obligaciones generales del Estado, acompañará siempre, como informe, el redactado por el Consejo de Administración.

Segundo. Sobre las cuentas generales que la Intendencia de Hacienda rendirá, sin excusa, todos los años, dentro del semestre siguiente á cada ejercicio económico, comprensivas de los ingresos y gastos liquidados y realizados en la administración del presupuesto general de la Isla.

Tercero. Sobre los asuntos del Patronato de Indias.

Cuarto. Sobre los acuerdos de los Gobernadores